



**REGIÓN**

# ¿Qué pasa con Brasil?

Por **Iole Ilíada Lopes**<sup>1</sup>

*La dirigente petista analiza la coyuntura política brasileña luego de la victoria de Dilma Rousseff en las últimas elecciones presidenciales, las reivindicaciones de las manifestaciones en varias ciudades del país pocos meses después de la asunción y las denuncias de corrupción sobre la estatal Petrobras en el marco de los impasses y dificultades que enfrentan los gobiernos progresistas de la región luego de los avances de la última década.*

Quien acompaña de lejos la coyuntura brasileña puede haberse sorprendido con las manifestaciones del domingo 15 de marzo en varias ciudades del país. Los números divulgados por la prensa variaron. Por ejemplo, el mayor acto realizado en la ciudad de San Paulo recibió estimaciones de entre 200 mil y un millón de personas en la calle. No obstante esta divergencia, se trató de un contingente significativo. Y aun si el orden del día y las reivindicaciones no fuesen claros ni unívocos, era inequívocamente una manifestación contra el gobierno de Dilma, reelegido hace poco más de cinco meses.

Para el que vive de cerca el escenario político brasileño y latinoamericano, sin embargo, está claro que dicha manifestación, convocada y transmitida en vivo por los principales medios de comunicación, no fue “un rayo en el cielo azul”. Este fue sólo un episodio más de una disputa que no se inició ahora y tampoco tuvo ese domingo su último capítulo.

Si observamos lo que pasa hoy en día en Latinoamérica, veremos que luego de impulsar importantes avances en lo que respecta a soberanía, crecimiento económico, reducción de las desigualdades y ampliación de los derechos, los gobiernos de izquierda enfrentan hoy un conjunto de *impasses* y dificultades que no se manifiestan de la misma manera en todos los lugares pero que inciden profundamente en la región al afectar a tres de sus principales países: Argentina, Venezuela y Brasil.

Innegablemente, dichos *impasses* y dificultades sufren la influencia de factores externos relacionados con la situación política y económica

<sup>1</sup> Traducción de Marcelo Canossa y Sonia Vezaro.

internacional. Pero sin considerar los factores internos, no es posible comprenderlos *in totum*.

Antes que nada, no está de más recordar que las fuerzas de izquierda, al llegar al gobierno por la vía institucional, no tomaron el poder ni tampoco cancelaron los intereses antagónicos existentes en las sociedades en las que fueron elegidas, en algunos casos en disputas muy duras. Igualmente, a pesar de haber mejorado la vida del pueblo, esos gobiernos no anularon y superaron todos los males heredados en la región luego de años de colonialismo, inserción dependiente en la economía mundial, dictaduras, políticas neoliberales. Entre esos males, se destacan los que confieren a Latinoamérica el deshonroso puesto de región más desigual del mundo.

En realidad, aunque con énfasis diferentes y con grados mayores o menores de profundidad, en todos esos países se buscó promover cambios socioeconómicos llevando al límite la capacidad del Estado de promover políticas públicas, pero modificando muy poco, desde el punto de vista contractual, las bases económicas y la concentración de riqueza. Y el problema que se enfrenta ahora es que esta capacidad se agotó. Ya no se puede seguir avanzando “por izquierda” sin reformas estructurales más profundas.

Esta dificultad genera un grave trance político para dichos gobiernos. Por un lado, dejar de avanzar lleva a una corrosión de su base social y electoral. Por el otro, tiende a alimentar la avidez de las clases dominantes y de una derecha rabiosa que nunca aceptó la idea de “ceder” sus asientos en un gobierno “a la izquierda”, ni tampoco la implementación de políticas sociales para las capas más pobres de la población, aunque esa élite prácticamente no haya perdido privilegios. En su afán por recuperar los gobiernos, por otra parte, dichos grupos no demuestran ningún aprecio sincero por la democracia.

### **El caso brasileño**

Lo que se dijo antes vale para Brasil. Con un agravante: en este país, a pesar del relativo éxito en los campos económico y social que obtuvieron los gobiernos encabezados por el PT, en el plano político no se enfrentaron las cuestiones fundamentales para una democracia. Citamos aquí el cambio del sistema electoral, la democratización de los medios de comunicación y el arreglo de cuentas con la historia reciente, con el castigo a los crímenes de la dictadura militar.



Esta situación desembocó en 2014 en una de las elecciones más polarizadas de la historia del país, en la cual se confrontaron dos puntos de vista antagónicos, con sesgos muy nítidos a izquierda y a derecha, tanto en lo referido a los temas económicos como a las cuestiones sociales y culturales.

Esta polarización reveló ser fundamental para el triunfo de Dilma, dado que posibilitó la movilización de amplios sectores de la izquierda en torno de su candidatura, reuniendo, en la segunda vuelta, a la militancia partidaria, a los movimientos sociales, a los intelectuales progresistas e

**En Brasil, a pesar del relativo éxito en los campos económico y social que obtuvieron los gobiernos encabezados por el PT, en el plano político no se enfrentaron las cuestiones fundamentales para una democracia como el cambio del sistema electoral, la democratización de los medios de comunicación y el arreglo de cuentas con la historia reciente, con el castigo a los crímenes de la dictadura militar.**

incluso a dirigentes y simpatizantes de partidos de izquierda que no habían dado su apoyo a la candidata. Al fin y al cabo, este proceso determinó que la victoria de Dilma fuese la victoria del proyecto defendido ampliamente por los sectores democráticos, populares y de izquierda en el país.

Contradictoriamente, sin embargo, la victoria de este proyecto, sea por los vicios del sistema electoral brasileño o por los errores políticos cometidos, no encontró correspondencia en la correlación de fuerzas institucional que surgió de la elección. Basta citar la composición del Congreso electo, el más conservador desde la redemocratización del país. Además, el proceso también demostró que la derecha y la oposición estaban mejor organizadas y articuladas y sin ningún problema de mostrar públicamente su faz más radicalizada, prejuiciosa, reaccionaria y golpista.

Consecuentemente, una de las primeras acciones de esa derecha fue tratar de cuestionar el resultado electoral, aventura que no prosperó dado que no había ninguna base material o jurídica para ello. En seguida, pasaron a usar las acusaciones de corrupción en Petrobras —que ya habían sido objeto de manipulación durante la campaña— para movilizar a parte de la población

en torno a la idea de un *impeachment* de la presidenta, antes incluso de haber asumido el segundo mandato. Regístrese que los primeros actos convocados en esa dirección tuvieron una pequeña adhesión, pero



participaron de estos muchos que, más que la deposición del gobierno, pedían una “intervención militar”.

### **Cartas mezcladas**

Habiendo triunfado con un programa de izquierda y gracias al apoyo de los sectores populares y progresistas de la población, la expectativa era que el segundo mandato –así como la reforma política y la tributaria– se sostendría políticamente principalmente a través de la movilización social de dichos sectores, y no de una gobernabilidad basada en la floja, infiel e ilusoria base parlamentaria.

Sin embargo, las primeras señales emitidas por el gobierno reelecto mezclaron las cartas. El nombramiento de un representante de la ortodoxia neoliberal para ocupar el Ministerio de Hacienda, el anuncio de un ajuste fiscal con medidas que afectan principalmente a los trabajadores y una composición del gabinete que apunta a la continuidad de la política de ceder cargos importantes a representantes de los sectores conservadores –apuntando con eso a conseguir algún apoyo en el Congreso– han generado confusión, división y una actitud desafiante en las bases sociales que reeligieron a Dilma.

La oposición de derecha, teniendo como punta de lanza los principales medios de comunicación y como principal vocero político al PSDB, se aprovechó inmediatamente de tales contradicciones. Al mismo tiempo que aplaudía las medidas ortodoxas anunciadas, señalaba las incongruencias entre lo que se prometió en la campaña y las medidas que está llevando a cabo la presidenta, acusándola de “estafadora electoral”.

Al mismo tiempo, los partidos conservadores supuestamente aliados al gobierno, especialmente el PMDB, vieron en las dificultades que atravesaba la presidenta la oportunidad para subir el precio de su apoyo, exigiendo más concesiones y más cargos y dificultando todavía más la aprobación de cualquier programa mínimamente progresista en el Congreso.

El elemento que faltaba para avivar la crisis fue hallado en el esquema de corrupción que se venía investigado desde el año pasado que involucra a grandes constructoras, fraudes en licitaciones, pago de sobornos a altos funcionarios de Petrobras y presuntos desvíos ilegales de fondos a campañas políticas. Decimos “presuntos” porque todavía no hay evidencias de que este dinero haya llegado de manera irregular a cuentas de candidatos y partidos. La aparente contradicción es que, a pesar del gran número de personas presas o acusadas en el proceso –incluyendo importantes



empresarios y altos representantes de la clase política—, la oposición y los medios convocaron al pueblo a indignarse, como si se tratase de un caso de impunidad y no de una demostración de que el país ha cambiado y ahora se investiga y se sanciona a los culpables, duela a quien le duela. Pero es fácil de comprender. Para ese sector de la población que los apoya, sólo se hará “justicia” cuando el PT, Lula o Dilma sean incriminados, aunque sean inocentes.

Además de la incriminación del PT, la corrupción en Petrobras también es funcional a la disputa política en contra del modelo de desarrollo implementado por los gobiernos de Lula y Dilma. Por un lado, la

**Al tratar de amplificar lo que ocurrió en Petrobras como si fuese algo estructural, la derecha apuntó claramente a la privatización de la empresa, o al menos a parte de su estructura, lo que sería un golpe mortal a cualquier proyecto de desarrollo nacional para Brasil.**

investigación sobre la empresa estatal y las principales empresas que prestan servicios paraliza negocios importantes y ayuda a estrangular aún más la economía brasileña. Por otro lado, sirve como pretexto para aquellos que quieren cambiar el *modelo de coparticipación* adoptado para las concesiones de exploración/explotación de las reservas del PreSal, que mantiene el control estatal sobre el proceso y se centra en la producción nacional. Por lo tanto, al tratar de amplificar lo que ocurrió en Petrobras como si fuese algo estructural, la derecha apuntó claramente a la privatización de la empresa, o al menos a parte de su estructura, lo que sería un golpe mortal a cualquier proyecto de desarrollo nacional para Brasil.

En este escenario político, dos manifestaciones fueron convocadas para la primera quincena de marzo. La primera, el 13 de marzo, con la participación de activistas sociales y sindicales, en defensa de Petrobras, contra las amenazas de golpe a la presidenta legítimamente electa, pero también en contra de algunas medidas propuestas por el ajuste fiscal del gobierno, contrarias a los intereses de los trabajadores. Esta manifestación reunió en todo el país cerca de 150 mil personas que, dado el carácter militante, era muy significativo. La segunda, la del día 15 de marzo, fue a la que nos referimos al comienzo de este artículo.

Ya sea por las pautas defendidas —que van desde las afirmaciones genéricas contra la corrupción hasta pedidos de retorno de la dictadura militar, pasando por expresiones bizarras como pedir la prisión de Karl Marx o el



fin de Paulo Freire y las escenas explícitas de odio al PT, a Lula y a Dilma, con muñecos ahorcados en la plaza pública— como por la composición social de sus participantes, según lo informado por varios institutos de investigación, esta segunda manifestación fue inequívocamente un corte de clase, con gran un predominio de los estratos blancos e ingresos superiores y un sesgo ideológico de derecha.

Esto no quiere decir que las clases populares y los trabajadores en general no puedan también estar insatisfechos con el comienzo del segundo gobierno de Dilma. Pero sí quiere decir que no es este estrato social el que decidió salir a las calles para protestar. Por el momento, reclaman aquellos que menos motivos tienen para hacerlo, porque siguen viviendo bien, con privilegios que no quieren compartir con el resto de la población. Y se quejan porque quieren interrumpir de cualquier manera el ciclo de transformación iniciado por los gobiernos de izquierda en el país, aunque no hayan logrado hacerlo, hasta ahora, por la vía electoral.

Por lo tanto, para superar esta crisis política, el desafío del gobierno de Dilma Rousseff y de las fuerzas que lo apoyan será repactar rápidamente con los sectores populares y progresistas que la llevaron a la victoria electoral, poniendo en marcha un programa que permita superar los obstáculos económicos sin descargar el peso en los trabajadores y sin poner en riesgo sus empleos, salarios y derechos. Eso será esencial en la construcción de una sustentación social que permita enfrentar a la derecha golpista, a la presión de los “mercados” y al Congreso conservador, avanzando en las reformas estructurales que restituyan al Estado su capacidad de fomentar el crecimiento y distribuir la renta y la riqueza.

Los próximos escarceos de esta disputa serán muy fuertes. Estarán en juego las condiciones para que Brasil retome su camino de desarrollo soberano con inclusión social. Con todas sus implicancias para Latinoamérica y para los proyectos de integración en la región. ●

